

Data paz

Reporte Trimestral

Número: 3

Enero - marzo / 2019

Centro de Investigación y Educación
Popular/ Programa por la Paz (Cinep/PPP)

Director general
Luis Guillermo Guerrero Guevara

Subdirector
Marco Fidel Vargas

**Coordinador Equipo
Iniciativas de Paz**
Fernando Sarmiento Santander

Producción editorial
Edwin Parada Rodríguez
Coordinador de publicaciones
Cinep/PPP

Diseño y diagramación
Juanita Giraldo Polanco

Cinep/Programa por la Paz
Carrera 5 No. 33B-02
PBX: (57-1) 2456181
Bogotá, D.C., Colombia
www.cinep.org.co



SUROCCIDENTE COLOMBIANO, ENTRE LA MOVILIZACIÓN POR ACCESO A DERECHOS Y LA BÚSQUEDA DE LA PAZ

Presentación

Pág. 2

Este trimestre en
Datapaz

*Fernando Sarmiento
Santander*

Lectura

Pág. 3

Este informe
presenta un
interesante ejercicio
cuantitativo y
analítico...

Carlos Duarte

Análisis de datos

Pág. 4

Suroccidente
colombiano:
Laboratorio de la
movilización social
por la paz

*Camilo A. Hernández
Barreto*

ESTE TRIMESTRE EN DATAPAZ

Fernando Sarmiento Santander

Coordinador del Equipo Iniciativas
de Paz y Datapaz del Cinep

Este tercer reporte completa la serie de ejes propuestos para el análisis de Datapaz. En esta ocasión se aborda la perspectiva territorial de la movilización por la paz. Los dos anteriores habían tratado los ejes de sector social (mujeres) y temáticas socio políticas (participación). Camilo Hernández, joven investigador del Equipo Iniciativas de Paz y analista de Datapaz del Cinep/PPP, ha revisado de forma amplia los datos para la región suroccidental de país, dando un contexto histórico sobre el conflicto y las acciones de la sociedad civil para responder a las diversas situaciones de violencia. Con ello da marco al momento actual de implementación de acuerdos de paz, donde esta región representa un escenario crítico del diseño e implementación de políticas y acción institucional en el marco de lo que se ha denominado la “paz territorial”. Carlos Duarte,

invitado a este reporte y gran conocedor de esta región del país, evidencia en su lectura la condición crítica de esta región en materia de paz territorial, cuando hace notar que la reivindicación diferencial de derechos, tanto interculturales como del campesinado en particular, son ejes de la movilización social del territorio y ejes de exigencia para el ajuste de las políticas públicas en general y de implementación de acuerdos en particular, como fue el propósito de la Minga indígena del pasado mes de abril. Estas dos perspectivas nos invitan a pensar sobre las categorías de análisis entre movilización por la paz y movilización por acceso a derechos; aunque se complementan y traslapan en los discursos de las organizaciones, es necesario definir los marcos teóricos que permitan evidenciar las diferencias y complementariedades en espacios y tiempos particulares. ●

[...] la **reivindicación diferencial de derechos**, tanto interculturales como del campesinado en particular, son ejes de la **movilización social del territorio** y ejes de exigencia para el ajuste de las políticas públicas en general y de **implementación de acuerdos en particular**, [...]

[...] el **acceso a la tierra** por parte de actores étnicos (indígenas y afrocolombianos) ha sido un **vector fundamental** en los procesos de **movilización social** de esta macro-región [...]

Invitado:
Carlos Duarte

Coordinador de la línea de investigación Desarrollo Rural y Ordenamiento Territorial del Grupo de Investigación Interculturalidad, Estado y Sociedad del Instituto de Estudios Interculturales. Universidad Javeriana – Cali.

Este informe presenta un interesante ejercicio cuantitativo y analítico en torno a los devenires de la “movilización social por la paz” en el suroccidente de Colombia. Sin embargo, dicha categoría es poco clara y quizás algunas de las acciones registradas para el primer periodo analizado (1978-2000) sean, en un alto volumen, acciones colectivas que aunque formalmente hacían un llamado a la paz, realmente estarían demandando el acceso a diversos recursos o derechos. Igualmente, sería interesante desagregar las movilizaciones registradas por tipos de actores (indígenas, campesinos y afrocolombianos, por ejemplo). En consonancia con lo anterior, vale la pena resaltar que el acceso a la tierra por parte de actores étnicos (indígenas y afrocolombianos) ha sido un vector fundamental en los procesos de movilización social de esta macro-región y un sine qua non para la construcción de la paz bajo un enfoque territorial; sin embargo, en los últimos años ha ido apareciendo con fuerza las reivindicaciones del campesinado por acceder a tierra,

territorio, así como a derechos especiales de orden colectivo. Las mesas locales de interlocución con el gobierno nacional sostenidas por organizaciones como el CIMA-PUPSOC-FENSUAGRO y la ANUC en el Cauca dan cuenta de diversos compromisos en dicho sentido. Este fenómeno, bajo el cual se busca aportar a la construcción de la paz territorial, se profundizó a lo largo del año en curso, tal como es posible advertir en el reciente paro liderado por la ANUC Cauca; pero sobre todo, con la Minga Cauca y la propuesta de Pacto Campesino para el actual Plan Nacional de Desarrollo por parte del CIMA-PUPSOC-FENSUAGRO. Las dinámicas anteriores permiten entrever que las organizaciones campesinas del suroccidente colombiano, además de una apuesta decidida por la construcción de una “paz territorial”, valoran además críticamente los derechos multiculturales que no los cobijan, pero sobre todo insisten en profundizar la política pública en términos tanto interculturales como de acceso a derechos especiales para el campesinado. ●

SUROCCIDENTE COLOMBIANO: LABORATORIO DE LA MOVILIZACIÓN SOCIAL POR LA PAZ

**Camilo A. Hernández
Barreto**

Historiador con Maestría en Geografía.
Investigador del Equipo Iniciativas de
Paz del CINEP/PPP. Analista Datapaz.

[...] el **suroccidente** ha sido un verdadero **laboratorio de paz**, especialmente en los últimos 8 años, a pesar de que el tan anunciado “**posconflicto**” no llegó con la **firma del acuerdo** entre el gobierno y las Farc-Ep, [...]

El suroccidente colombiano es una región que ha sido definida a partir de dinámicas que históricamente le han dado forma: primero constituyéndose como zona periférica del imperio español, luego como un lugar central de la vida republicana, como fue el Gran Cauca, y finalmente, ya entrado el siglo XX, como uno de los ejes para el desarrollo del país mediante la ampliación de sus vínculos con el mercado internacional por el pacífico. La proyección de esta región ha traído una variedad de conflictos, que sumado a la débil presencia de instituciones estatales y a la aparición de grupos armados y bandas de narcotraficantes han mantenido a esta región –conformada por los departamentos de Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Putumayo– como una periferia del Estado colombiano.

La expansión de la guerra desde 1990 ha afectado de distintas maneras a las poblaciones que lo habitan, pero especialmente se destaca el auge de la economía de los cultivos de uso ilícito y de, manera más reciente, de la minería ilegal. Por lo anterior, la zona de pacífico es el epicentro de la guerra en

la actualidad, mientras que en la zona Andina ha sido de menor intensidad, a excepción del sur del Cauca, que pasó de sufrir tomas guerrilleras durante los años 90 a convertirse en uno de los focos de amenazas a líderes sociales. Por último, encontramos la zona del piedemonte Amazónico, en el departamento de Putumayo, en donde la guerra tuvo un pico significativo a mediados de los noventa, debido principalmente al afán del Estado por contener la expansión de las Farc hacia la zona andina nariñense y las crecientes protestas de miles de campesinos-cocaleros.¹

El incremento de asesinatos a líderes sociales desde 2016 es muestra latente de la continuidad de la guerra y de lo lejos que está el suroccidente² de convertirse en el “laboratorio del posconflicto”³ que añoraba el Gobierno de Juan Manuel Santos. Ante este panorama no se puede pensar en soluciones fáciles para las problemáticas de esta

región, pero si es necesario tener en cuenta las herramientas con las cuales las comunidades y organizaciones sociales han contado para buscar salidas al callejón de la guerra.

Una de estas es la *movilización social por la paz*, la cual no solo se refiere, en un sentido amplio, a las reivindicaciones por derechos individuales y colectivos, sino que es un mecanismo para la construcción de paz mediante el cual se fortalecen las redes y relaciones que facilitan la articulación y confluencia política entre comunidades y organizaciones a distintas escalas geográficas, con el fin de rechazar la guerra (paz negativa), defender los derechos humanos y del territorio y contribuir a la generación de condiciones para la convivencia pacífica (paz positiva).

En ese sentido, el Suroccidente ha sido un verdadero laboratorio de paz, especialmente en los últimos 8 años, a pesar de que el tan anunciado “posconflicto” no llegó con la firma del acuerdo entre el gobierno y las Farc-Ep, es necesario reconocer que el contexto de negociación ha generado posibilidades para la movilización por la paz en esta región.

Para el análisis se propone revisar las tendencias de la movilización entre 1978 y 2018, identificando algunos cambios y continuidades en ella y, de esta manera, analizar su relación con el proceso de paz adelantado entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc (2012-2018). En este reporte se tendrá en cuenta datos demográficos del censo del DANE de 2005 y los de Datapaz, con el fin de poder matizar los impactos y alcances de la movilización social por la paz en momentos y lugares específicos.

TENDENCIAS HISTÓRICAS DE LA MOVILIZACIÓN POR LA PAZ EN EL SUROCCIDENTE (1978-2018)

En el suroccidente colombiano vive el 15% de la población del país (73% en zona urbana o cabeceras municipales y 27% en zona rural). Según Datapaz, 1.186 *acciones colectivas por la paz (ACP)* ocurrieron en esta macro-región durante el período analizado. De estas, el 33% tuvieron lugar en la ciudad de Cali (la cual tiene 2.470.747 habitantes), mientras que el 20% en municipios con más de 200.000 habitantes; como es el caso de: Popayán, Buenaventura, Pasto, Palmira, Tuluá, y Tumaco.

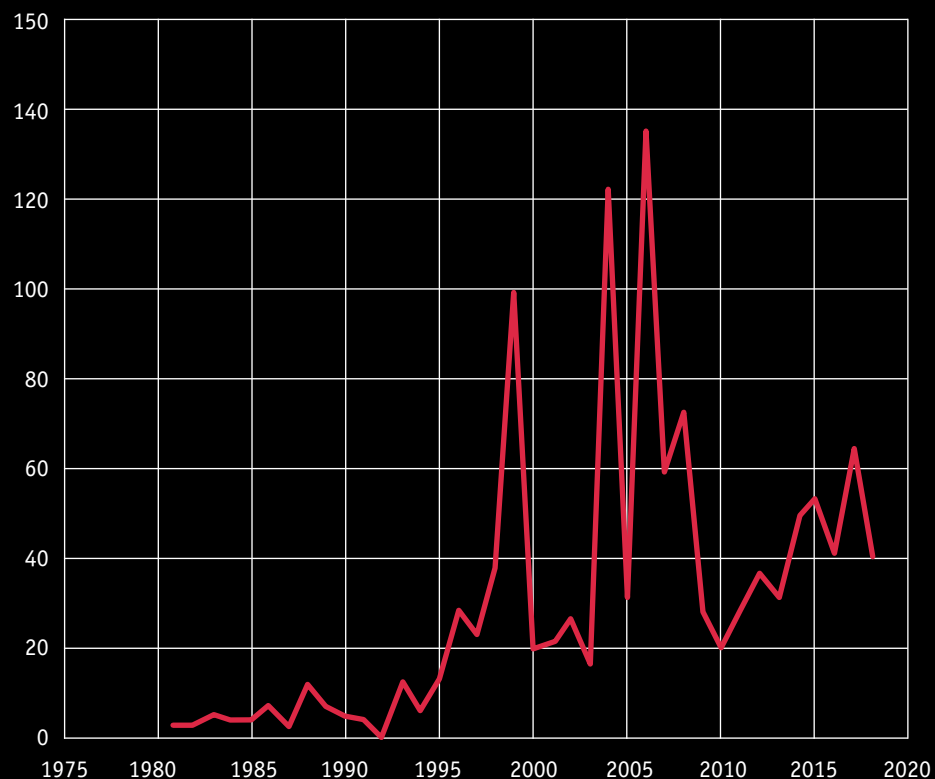
En cuanto a los municipios más ruralizados, es decir aquellos donde más del 60% de la población vive por fuera de la cabecera municipal, las ACP solo representan un 6% de las reportadas durante el mismo periodo. En este grupo se resaltan municipios que han sido muy afectados por el conflicto armado como es el caso de: Toribío, Bolívar, Buenos Aires, Silvia, Piendamó y Caloto en el Cauca y Samaniego y Leiva en Nariño.

La movilización por la paz en el suroccidente, al igual que en la mayor parte del país, se ha concentrado en las ciudades y en los municipios de segunda y tercera categoría, mientras que los municipios con poblaciones más dispersas y

1 Fundación Ideas para la Paz (2013). Dinámicas del conflicto armado en el sur del valle y norte del cauca y su impacto humanitario, Bogotá FIP; González Posso (2018) Informe Especial Cauca y Nariño. Crisis de seguridad en el Posacuerdo, Bogotá, Indepaz; Ramírez, María Clemencia. Entre el estado y la guerrilla: identidad y ciudadanía en el movimiento de los campesinos cocaleros del Putumayo, Bogotá, Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2001.

2 Defensoría del Pueblo, Alerta Temprana No. 026-18 del 28 de febrero de 2018.

3 El Espectador, (18 de febrero de 2018) “Una apuesta por el suroccidente colombiano”, disponible en: <https://www.elespectador.com/elecciones-2018/noticias/politica/una-apuesta-por-el-suroccidente-colombiano-articulo-741185> , recuperado 21/01/2019.



Gráfica 1.
Acciones Colectivas por la Paz en el suroccidente (1981-2018)

Fuente:
Datapaz, CINEP/
PPP, marzo 2019

mayoritariamente rurales han tenido una participación comparativamente mucho menor. En la gráfica se puede observar que en los años 1999, 2004, 2006 y 2008 representan los picos más altos de la movilización, que luego cae estrepitosamente en el año 2010, para recuperarse lentamente entre 2011 y 2017 y disminuir de nuevo en 2018.

En cuanto a los motivos de la movilización destaca que 51% de las ACP han sido por paz negativa, mientras que el restante 49% por paz positiva,

la mayor parte de estas en Cali. Es decir que paralelamente a las iniciativas en respuesta directa al conflicto han estado presentes casi en la misma proporción acciones que apuntan hacia una transformación integral y pacífica del conflicto armado.

En el resto de municipios del suroccidente, incluyendo las ciudades como Pasto, Ipiales, Popayán y Buenaventura, la proporción de acciones por paz negativa (63%) ha sido mucho mayor por paz positiva (37%). Esto se debe en parte a

dos razones: la primera es porque estas ciudades intermedias tienen una relación más cercana con entornos y municipios más rurales, especialmente con aquellos que han sido escenario del conflicto armado, por lo cual la movilización allí ha estado más condicionada a las dinámicas de éste. Sin embargo, esto no ha sido de manera constante, sino que obedece más bien a coyunturas y momentos específicos. Por ejemplo, en el caso de estas 4 ciudades la mayor parte de ACP -por paz negativa-, se concentran entre los años 1996 y 2001, luego entre 2005 y 2010 y por último una concentración en el año 2014.

El año 1999 es muy importante para el suroccidente ya que la creciente inseguridad causada por el conflicto armado desde 1996 llevó a que la movilización fuera masiva. Hay que tener en cuenta que las Fuerzas Militares sufrieron una crisis que “se inició el 15 de abril de 1996 con el ataque a Puerres (Nariño) y continuó con la toma de la base militar las Delicias en el departamento de Putumayo, el 30 de agosto; el ataque el 7 de septiembre a la base militar de La Carpa en el departamento de Guaviare; y la acción ofensiva contra la base militar de Patascoy en el departamento de Nariño, el 21 de diciembre” (Echandía, 2004, 67). Para 1999 las Fuerza Militares toman de nuevo la iniciativa ofensiva, por lo cual hay una clara tendencia de intensificación de combates y reducción de acciones militares por parte de las guerrillas en los siguientes 3 años (Echandía, 2004, 66).

Dentro de los actores más destacados encontramos a la iglesia católica, los pueblos indígenas y el

campesinado, que fueron muy activos durante este año como convocantes y participantes de las ACP. En marzo se realizó el Viacrucis Nacional, convocado por la Conferencia Episcopal. Para este año se incluyó en el recorrido a 14 poblaciones de esta región a petición de los obispos de Putumayo, Nariño, Cauca y Valle del Cauca. De este modo, el Viacrucis pasó por: Puerto Asís, Mocoa, Pasto, Ipiales, Tumaco, Samaniego, La Cruz, Popayán, Santander de Quilichao, Palmira, Buga, Tuluá, Cartago, Buenaventura y Cali, con “la convicción de que no sólo debe hacerse énfasis en la negociación del conflicto sino en la reconstrucción de la red social misma, el único camino para llegar a una reconciliación real es respetar los derechos humanos.” (*El Tiempo*, 1999).

Durante ese mismo mes Cali fue epicentro de varias manifestaciones, unas en favor de la salida negociada al conflicto armado y otras en rechazo a los secuestros realizado por las guerrillas Farc y ELN. Según el movimiento “No Más”, entre “junio y agosto (1999) se realizaron 22 marchas regionales, 21 en ciudades y el 24 de octubre se realizó la Primera Gran Marcha Nacional por La paz en aproximadamente 700 municipios” (Semana, 2000). En estas marchas participaron al menos 65 municipios del suroccidente. Adicionalmente el año finalizaría con el Paro del Suroccidente colombiano que durante 25 días del mes de noviembre tuvo bloqueada la vía Panamericana entre Cauca y Nariño. El bloqueo solamente fue levantado una vez se firmaron acuerdos con el Gobierno de Andrés Pastrana, en los que se prometía desde obras de infraestructura hasta acciones para afrontar el paramilitarismo.

Ahora bien, los picos de movilización ocurridos en los años 2004, 2006 y 2008 se dan en un contexto diferente a lo ocurrido en 1999, pues para estos años no hay un ambiente favorable a las negociaciones con grupos guerrilleros y la ofensiva estatal está en auge mediante la implementación de la política de Seguridad Democrática. Por lo anterior, la movilización en el suroccidente tiende a fragmentarse, la escala de su accionar político se redirige ahora más hacia lo local y en menor medida a lo regional. Ya no se tendrán las grandes acciones articuladas a nivel nacional como las ocurridas entre 1996 y 1999.

Los motivos de la movilización en estos años son indicador de estos cambios, pues en 2004 la mayor parte de las ACP por paz negativa tienen como motivo la “inseguridad y violencia generalizada” en el suroccidente, mientras que las de paz positiva solo se enfocaron a la promoción de la paz mediante acciones educativas, en especial en el Valle del Cauca. Para el año 2006 la proporción de ACP por paz negativa aumentó, pasando de 58% en 2004 al 65%, por el mismo motivo -“inseguridad y violencia generalizada”-. Se evidencia una preocupación creciente por la forma como la violencia en general está afectando a la juventud y a la niñez. De este modo, no es sólo el rechazo al conflicto armado, sino a múltiples factores de violencia por los que se movilizan pobladores del Valle y del Cauca. Igualmente, entre 2006 y 2008 se ve una caída en las acciones por paz positiva, que representa 22 puntos porcentuales, pasando del 57% al 43% respectivamente. Dichas

acciones son básicamente campañas o acciones educativas para reducir violencias de todo tipo.

En cuanto a la cobertura hay que resaltar que durante todo el período analizado (1978-2018) el 25% de las ACP alcanzó el nivel local y municipal, concentradas en su mayoría en Cali (80%), mientras que un 32% de las ACP alcanzaron una cobertura departamental y regional, el 14% fueron articuladas con otras acciones a nivel nacional, es decir que fueron iniciativas promovidas desde varios lugares y por varias organizaciones; tal es el caso de Semana por la Paz que se celebra en el mes de septiembre cada año. Para los años 1999, 2004, 2006 y 2008 la proporción es diferente pues solamente el 14% de las ACP tuvieron cobertura municipal y local, mientras que el 55% fue departamental y el 21% fueron de carácter nacional, a las cuales se articularon varios municipios del suroccidente como ocurrió con las marchas contra el secuestro de 1999.

Adicionalmente la expansión del paramilitarismo que se da entre 1999 y 2004 con accionar del Bloque Calima en el Cauca y Valle del Cauca, el Bloque Libertadores del Sur en Nariño y Frente sur en el Putumayo también contribuyeron a que organizaciones y comunidades redujeran su visibilidad a nivel nacional pero, en algunos casos a que aumentara a nivel municipal y departamental. Paradójicamente, a pesar de la fragmentación, la movilización social por la paz ocurrida entre los años 1999 a 2008 también fue la más alta registrada para todo el período estudiado (1978-2018) pues representó el 50% de la misma.

MOVILIZACIÓN SOCIAL EN EL SUROCCIDENTE Y EL PROCESO DE PAZ CON LAS FARC 2012 -2018

Los procesos de diálogo y negociación no solo son exitosos por alcanzar un acuerdo que finalice confrontaciones armadas que han vivido distintas sociedades. Estos también ofrecen oportunidades para ampliar la participación política de sectores históricamente excluidos. El suroccidente justamente se ha convertido en un laboratorio de paz porque estos sectores históricamente excluidos han sabido aprovechar estas oportunidades para consolidar agendas e iniciativas de paz que buscan superar causas que generan violencia y mejorar sus condiciones de vida. En ese sentido, la movilización social por la paz en el suroccidente se puede observar el vínculo entre paz y desarrollo y esa es quizá la mayor particularidad, pues en el suroccidente estos sectores están muy organizados y, a pesar de las condiciones de la guerra, existen redes de organizaciones que han logrado resistir y mantenerse activas en medio del conflicto armado en esta subregión.⁴

El periodo del proceso de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc (2012-2010) no fue la excepción, pero tampoco se dio una movilización tan masiva como la ocurrida en los años analizados en la sección anterior.

Luego de diez años de implementación del Plan Colombia y la Seguridad Democrática el país parecía poco propenso a la salida negociada al conflicto armado, por lo que el proceso de

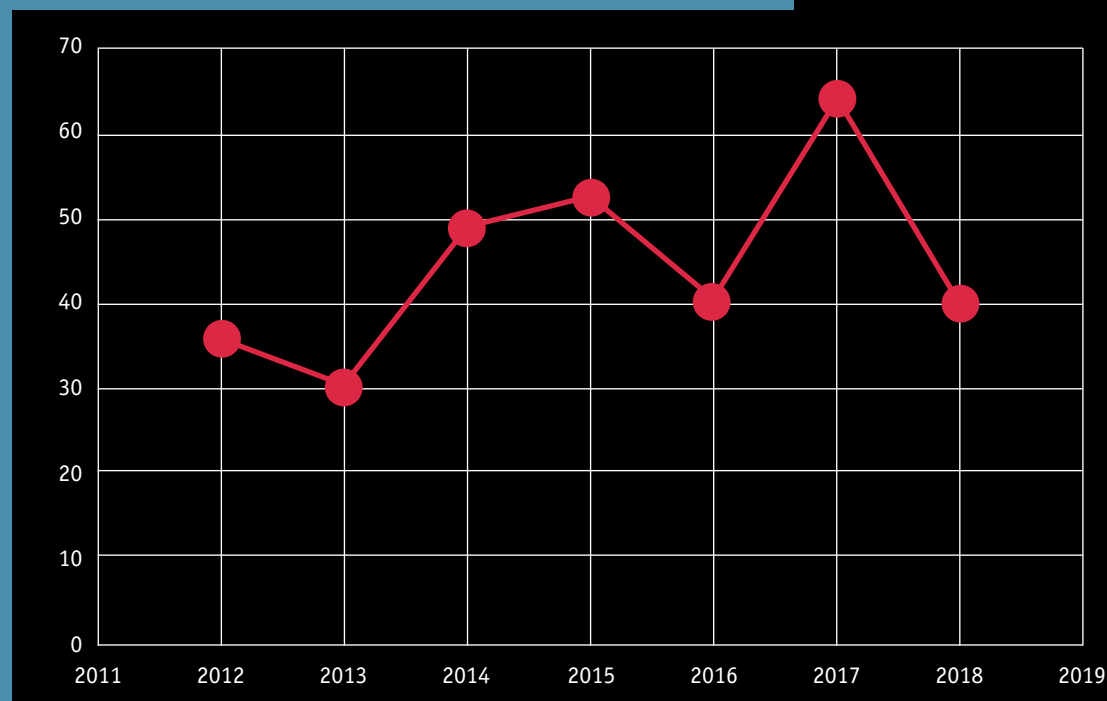
paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc (2012-2018) no logró tener un apoyo tan masivo como en su momento lo tuvo la propuesta de Andrés Pastrana. A pesar de ello desde 2012, la movilización por la paz en el suroccidente se fue recuperando progresivamente. Como se puede observar en la gráfica 2, solamente se da un pico en 2017 pues las ACP en estos años (2012-2018) representaron un 25% de los registros para todo el periodo analizado (1978-2018).

Contrario al periodo anterior, las acciones por paz positiva (67%) fueron mayoritarias sobre las acciones por paz negativa (33%). ¿A qué se debe este cambio en una sociedad que parece desencantada con la paz? Una posible respuesta puede estar en que se hayan dado cambios en las estrategias y motivos de movilización de un periodo a otro. De esta manera, entre 1999 y 2008 el 65% de las estrategias utilizadas se encaminó mucho más hacia

Gráfica 2.
Acciones Colectivas por la Paz en el suroccidente (2012-2018)

Fuente:

Datapaz, CINEP/
PPP, marzo 2019



⁴ En el suroccidente hay reductos de la ANUC en algunos municipios, organizaciones regionales como el CRIC, el CIMA, el PUPSOC entre otros. Que a su vez están conformadas por organizaciones locales de base que son el sustento de muchas de estas iniciativas que han contribuido a la construcción del suroccidente como macro-región.

acciones de protesta y menos a otras estrategias como la educación e incidencia política (30%). Para los años 2012 a 2018 las acciones de protesta solo representan un 28% mientras que las de educación e incidencia política pasan a 61%.

Si nos acercamos a los motivos se puede ver que las acciones para la “Promoción de la Paz”⁵ y para la “Búsqueda de alternativas para la paz”⁶ representan un 67% de estas. Es decir que las campañas, actos culturales, homenajes, encuentros, seminarios y foros son mucho más numerosos que las marchas, protestas y concentraciones.

En cuanto a la cobertura se evidencian cambios frente al periodo anterior. El porcentaje de ACP en los municipios y localidades aumentó, pasando de un 26% entre 1999 y 2008 a un 63% entre 2012 y 2018. La articulación a nivel de región no ha sido tan variable, pues paso del 6% al 8% para los mismos periodos. La gran diferencia se da a nivel de los departamentos pues de 41% cayó al 5% en el cual el 94% de las ACP del periodo 1999 a 2008 se da en el Valle del Cauca.

Ahora bien, si nos acercamos a municipios más ruralizados que han sido afectados por el conflicto⁷ armado observamos que durante este periodo (2012 - 2018) las acciones por paz positiva son también mayoritarias pero en un porcentaje menor, apenas el 53%. En cuanto a las estrategias y motivos en estos municipios también han sido mayoritarias las acciones de educación e incidencia política (60%) mientras que las acciones de resistencia civil y protestas ocupan un 40% del repertorio.

5 Cuando el motivo de la acción colectiva es realizar acciones que favorecen una posición positiva con relación a la construcción de la paz, o promover acciones pedagógicas en esa dirección en forma abstracta o general (sin explicitar cuál es el contenido de la misma) (García-Durán, 2006: 341).

6 Cuando el motivo acción colectiva es discutir, formular o implementar propuestas, estrategias o alternativas que buscan afianzar la paz (en términos más amplios que un proceso de negociación) (García-Durán, 2006: 341).

7 Son aquellos en donde la mayor parte de la población se ubica en zona rural y no en la cabecera. En Datapaz se cuenta con información de los siguientes municipios del suroccidente que cumplen con este criterio: Cauca: Toribio, Bolívar, Buenos Aires, Caloto, y Silvia. Putumayo: Valle del Guamuéz y Nariño: Samaniego y Leiva.

De cualquier forma la experiencia de la movilización por la paz en el suroccidente muestra aprendizajes importantes, pues el fortalecimiento de lo local muestra que cada vez son más las agendas organizativas que vinculan la paz y el desarrollo en su quehacer. Por lo anterior, es necesario profundizar en estos aprendizajes y sus potencialidades de cara a la difícil etapa de implementación del acuerdo de paz que continua siendo saboteado sistemáticamente por sectores de extrema derecha aliados al Gobierno de Iván Duque. ●

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Defensoría del Pueblo, Alerta Temprana No. 026-18 del 28 de febrero de 2018.
- Echandía, Camilo (2004). La Guerra por el Control Estratégico en el Suroccidente Colombiano, en *Revista Sociedad y Economía*, Número 7, pp. 65-89
- El Espectador, (18 de febrero de 2018) *Una apuesta por el suroccidente colombiano*, recuperado de: <https://www.elespectador.com/elecciones-2018/noticias/politica/una-apuesta-por-el-suroccidente-colombiano-articulo-741185>
- El Tiempo (1999) *El Vía Crucis de los Derechos Humanos*, recuperado de: <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-880324>
- Fundación Ideas para la Paz (2013). Dinámicas del conflicto armado en el sur del valle y norte del cauca y su impacto humanitario, Bogotá FIP.
- García, Mauricio (2006). Movimiento por la Paz en Colombia. 1978-2003. Bogotá, D.C., Cinep/PPP.
- González Posso (2018). Informe Especial Cauca y Nariño. Crisis de seguridad en el Posacuerdo, Bogotá, Indepaz.
- Ramírez, María Clemencia. Entre el estado y la guerrilla: identidad y ciudadanía en el movimiento de los campesinos cocaleros del Putumayo, Bogotá, Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2001.
- Semana (2000) *Cartas a los Violentos*, recuperado de: <https://www.semana.com/nacion/articulo/cartas-violentos/42912-3>